

SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO

Análisis de la situación guatemalteca en el inicio del 2004

INTRODUCCIÓN

Por primera vez en la historia contemporánea de Guatemala una alianza integrada por la Oligarquía Agroindustrial Financiera y la Gran Burguesía Industrial Financiera controlan abiertamente el poder Ejecutivo del país. Es decir, el poder real (bloque en el poder) asume por medio de sí mismos o de sus operadores políticos la conducción de Guatemala.

La decisión de forzar las alianzas en una sola candidatura presidencial fue el resultado de un proceso de desarrollo económico que ha puesto a la Gran Burguesía Industrial Financiera en mejores condiciones para ejercer la hegemonía del bloque dominante.

A la vez, el resultado de las elecciones del 9 de noviembre del 2003 produjo un Congreso Legislativo sin mayorías y con tres partidos opositores que pueden manejar en alianza dicho poder del Estado. A ello, hay que agregar que el actual presidente, Oscar Berger, no cuenta con un partido político sino con una alianza conformada por al menos cinco grupos con sus propios intereses.

Sin embargo, la cuestión de fondo se encuentra en la crítica situación económica del país, los grandes negocios diseñados por el bloque dominante y la paupérrima vida cotidiana de más del 80 por ciento de los guatemaltecos.

El anterior gobierno, dirigido por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) no logró consolidar un sector emergente que pudiera competir con los dos sectores del bloque de poder (señalado arriba) y se perdió en un sin fin de escándalos de corrupción, aunque con el apoyo norteamericano y en razón de los intereses de éstos últimos impulso reformas importantes en la legislación nacional (reformas a los Códigos de Trabajo y Municipal, Leyes Monetarias, Ley de Descentralización y Ley de Consejos de Desarrollo, entre otros).

Con todo, el FRG cuenta con 43 diputados y cerca de 120 alcaldes. Por eso es que sus últimas acciones gubernamentales estuvieron dirigidas a generar condiciones difíciles para el nuevo gobierno, principalmente en el marco económico y político (asignación de 13 mil plazas de maestros en forma ilegal, y el congelamiento del Impuesto a Empresas (IEMA).

En consecuencia, el presidente y sus principales operadores políticos al parecer han diseñado una estrategia para conseguir la estabilidad, lo cual se expresa en el acuerdo con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) para integrar la junta directiva del Congreso y las comisiones parlamentarias. Mientras que presiona a la Corte de Constitucionalidad para que sus fallos favorezcan ala bloque dominante (salario mínimo, impuestos).

Finalmente, el gobierno de Berger se encuentra metido en una mar de contradicciones que van desde las estratégicas, es decir, cómo insertar los intereses del bloque dominante en el Tratado de Libre de Centroamérica con Estados Unidos y cómo cumplir con el convenio con el Fondo Monetario Internacional cuya vigencia vence en marzo próximo, hasta las mediocridades que se plantean en la ocupación de puestos de los cinco grupos que componen la alianza gobernante.

EL BLOQUE EN EL PODER

Como apuntamos arriba, el bloque dominante en Guatemala se compone de la siguiente manera:

- a) La Oligarquía Agroindustrial Financiera (OAF), dirigida por el oligopolio azucarero que cuenta con 19 ingenios y concentra la producción y comercialización del dulce. Este sector además está integrado por los cafetaleros grandes, en total unos 34 que concentran la comercialización del grano, los bananeros y sus alianzas con los grandes consorcios norteamericanos (Estándar, Del Monte y Dole), los productores de cardamomo, aun cuando los precios han caído en el mercado internacional, siguen siendo parte importante del ingreso de divisas al país. Especial lugar ocupan las maquilas en este sector, puesto que generan una gran cantidad de empleo (200 mil, según la propaganda de la empresa privada).

Como puede observarse, este sector está directamente ligado a las exportaciones y por tanto está en situación de debilidad frente a las presiones económicas y extraeconómicas (políticas) que puedan ejercer los dueños del mercado internacional. Por eso se considera que el actual jefe del sector azucarero (Julio Herrera) es más proclive a entrar en negociaciones con otros sectores.

Esta agrupación económica tiene sus asideros financieros en los bancos Agromercantil, Del Café, Occidente y Quetzal, entre otros.

- b) La Gran Burguesía Industrial Financiera (GBIF), esta dirigida por el consorcio que se aglutina en la industria avícola y se extiende a las harinas, concentrados, embutidos (es decir, comida) y hotelería y sus anexos, en manos de la familia Gutiérrez Bosh. En este sector se integran el monopolio cementero, las bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), tiendas mayoristas.

Este sector dirige sus actividades hacia el mercado interno y se considera que por tales razones resisten más las presiones del exterior y representan el sector más duro del bloque dominante.

Sin embargo, todo parece indicar que fue este el sector que logró la cooptación de importantes miembros del movimiento social, en especial del de derechos humanos, para apoyar la candidatura de Berger a cambio de puestos en el gobierno.

La GBIF cuenta con el soporte financiero de los bancos Industrial, GT Continental (los dos más grandes del país), Reformador y República.

EL NUEVO GOBIERNO

El eje de poder descrito en el apartado anterior se expresa con claridad meridiana en la composición del nuevo gobierno encabezado por Oscar Berger y Eduardo Stein.

La creación de la figura de comisionado, que no pertenece a la estructura legal del país es una muestra de las contradicciones en el reparto de intereses de los dos sectores, ya que mientras la OAF se queda solamente con Inversión y Competitividad (Miguel Fernández, en más grande maquilador guatemalteco, cuyo producto principal es la marca Lee), la GBIF se receta ocho comisionados: Defensa y Seguridad (Otto Pérez Molina), Modernización del Estado (Harris Witbeck), Reforma Política (Fuentes Destarac) Descentralización y Poder Local (Rodolfo Paiz), Seguimiento al Plan de Gobierno (Richard Aitkenhead), Turismo (Willy Kaltschmitt), Transparencia (Carlos Vielman), Megaproyectos y FIS (Luis Flores).

Cambia un poco en la secretarías principalmente en la Privada (Vila del sector azucarero) y general de la presidencia, mientras que el resto pertenecen a la GBIF o son parte de sus operadores políticos, como los casos de Eduardo González (secretaria ejecutiva) y Frank La Rué (Comisión Presidencial de Derechos Humanos), respectivamente.

En el caso del gabinete de ministros, aparte de Manuel Salazar (Cultura y Deportes) todos los demás son parte o han sido afines a la GBIF. Además lo integran: Arturo Soto (Gobernación), María Antonieta del Cid de Bonilla (Finanzas), Marcio Cuevas (Economía), Marco Tulio Sosa (Salud), María del Carmen Aceña (Educación), Alvaro Aguilar (Agricultura), Eduardo Castillo (Comunicaciones), César Méndez (Defensa), Jorge Briz (Relaciones Exteriores), Mario Dary (Ambiente), Roberto González (Energía y Minas) y Jorge Gallardo (Trabajo).

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Tal como fue indicado arriba, la existencia de un parlamento sin mayoría configura una situación de alianzas coyunturales, dado que ninguno de los partidos que podrían intentar una alianza permanente está interesado en ellas.

El acuerdo entre la alianza gobernante, el PAN y la UNE que llevó a este último partido a la presidencia del Congreso fue un acuerdo de puestos y no una estrategia de gobernabilidad como erróneamente se expresado a la opinión pública. Fue una necesidad pero también un amarre frente a la carrera presidencial para el 2007 que comenzó al día siguiente de la segunda vuelta electoral, el 28 de diciembre pasado.

En menos de quince días de tomar posesión existen las siguientes bancadas parlamentarias: la UNE 32 diputados, FRG 41, PAN 17, Unionistas 5, Alianza Nueva Nación 4, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 2, Democracia Cristiana 1, Desarrollo Integral Auténtico 1, Independientes 10, Movimiento 17 de Noviembre (posiblemente el partido GANA) 23, Partido Patriota (PP) 17 y entre Movimiento Reformador y Partido de Solidaridad Nacional 5.

Tanto en el Ejecutivo como en el parlamento se expresaran los diferentes intereses frente al futuro, en especial en los grupos de la alianza gobernante, donde se mostrarán las intenciones presidenciales del general Otto Pérez Molina del PP y las de Luis Flores y Eduardo González en el futuro partido ya anunciado por el presidente Berger.

EL MARCO ECONOMICO DEL NUEVO GOBIERNO

En aproximadamente la última década la economía guatemalteca ha oscilado entre la recesión y el estancamiento. Su crecimiento siempre ha estado debajo de la tasa de crecimiento poblacional. Los factores que más dinamismo han mostrado no tienen nada que ver con la producción nacional:

- 1) Las remesas de los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos (1 millón 200 mil) que durante 2003 estarán por la cifra de 2,150 millones de dólares, es decir, casi el 50 por ciento de las divisas que ingresan al país y arriba del 50 por ciento del presupuesto nacional para el 2004.
- 2) El narcotráfico, cuyas cifras no pueden ser estimadas, pero que se reflejan constantemente en la sociedad, principalmente en la industria de la construcción y los automóviles de lujo.

Aunado a lo anterior, durante los últimos ocho años, casi la mitad del presupuesto nacional se consume en el pago de la deuda pública (externa e interna) y en obligaciones institucionales (porcentajes para entidades autónomas y semiautónomas).

El actual presupuesto es aproximadamente de 29 mil millones de quetzales, muy debajo de la propuesta discutida con el Fondo Monetario Internacional que era de 33 mil millones. En estas condiciones el actual gobierno que durante la campaña electoral proclamó su decisión de eliminar el Impuesto a los Activos, conocido como IEMA encuentra una sus primeras y difíciles situaciones. Por un lado, sin ese impuesto es casi imposible llevar a cabo la gestión gubernamental y, por el otro, incumple el convenio con el FMI en cuanto a mantener un déficit fiscal del 1.7 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) ya que la actual Ministra de Finanzas ya anuncio un déficit fiscal que supera el 4 por ciento.

Como ha sido la experiencia guatemalteca y latinoamericana, en estas circunstancias el gobierno buscará alternativas entre las que se encuentran:

- 1) Recorte del gasto social, con las implicaciones de crisis política que conlleva en educación, salud, servicios, situación agraria, vivienda, entre otros.
- 2) Mantener el IEMA (Impuesto a los Activos).
- 3) Elevar el impuesto al valor agregado (IVA) en dos o tres puntos, es decir, al 14 o 15 por ciento.
- 4) Elevar la deuda pública.

Las primeras acciones económicas que se generaron en el gobierno de Berger indican que el apetito voraz del bloque dominante es desmedido. Antes de tomar posesión ya se habían incrementado los precios de la canasta básica a raíz del aumento del azúcar. Seguidamente se anuncia el aumento en las tarifas de los servicios públicos (agua y electricidad) y con ello el gas licuado y con ello las consecuencias negativas en cascada para los bolsillos de los guatemaltecos.

Por si fuera poco, el mismo presidente en su discurso de toma de posesión anunció su decisión de alcanzar una moneda competitiva y de cambio neutro, lo que significa un proceso de devaluación que hasta ahora es explicado como un proceso de deslizamiento (el quetzal perderá su valor en forma escalonada y no de golpe). Este elemento se combina con la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender el aumento a los salarios mínimos que había decretado el anterior gobierno. Es decir, hay en la práctica una rebaja de salarios para los trabajadores guatemaltecos.

Al mismo tiempo la ministra de Finanzas anuncia la emisión de bonos por cerca de 700 millones de quetzales, mientras el Banco de Guatemala a través de las Operaciones Monetarias Abiertas (OMA) esteriliza quetzales para mantener la estabilidad macroeconómica aunque eso represente una deuda pública de 15 mil millones de quetzales. Desde luego muy debajo de la deuda pública que dejó el gobierno del presidente Alvaro Arzú, que era de 22 mil millones.

El otro problema que enfrenta el gobierno y que tiene repercusiones sociales es el siguiente: ni la OAF ni la GBIF invirtieron millones de quetzales en la campaña electoral para no poder hacer negocios. Los principales son:

- 1) La construcción del nuevo aeropuerto.
- 2) La autopista o las autopistas para dicho aeropuerto.
- 3) La utopista alternativa Guatemala-El Rancho.
- 4) El anillo metropolitano.
- 5) El negocio del gas natural en el norte de Izabal.

En las condiciones actuales el gobierno sólo tiene la alternativa de llevar a cabo estos planes por medio de las concesiones. Esto implica un nuevo proceso de privatización que puede incluir servicios sociales para reducir el gasto.

En este contexto hay que observar con precisión el único incumplimiento del gobierno del FRG con el FMI que es la revisión del Fondo de Pensiones del IGSS. Ese Fondo que en la actualidad tiene 6,400 millones de dólares es un factor determinante en el manejo macroeconómico del país. El 80 por ciento de dichos fondos se mantiene esterilizado en el Banco de Guatemala al 4 por ciento anual, mientras que el resto (unos 1,450 millones de quetzales están repartidos en los bancos privados del sistema a un promedio de 8 por ciento anual).

La experiencia de la privatización de esos fondos en México y El Salvador indica que la empresa privada sencillamente hizo desaparecer el dinero (por decirlo de manera suave, porque en verdad se lo robaron), lo que obligó a los estados respectivos a financiarlos a través de impuestos extraordinarios.

En ese contexto hay que estar alerta con las actuaciones de la CC, ya que los mismos a los que cuando aprobaron la candidatura de Ríos Montt votaron en contra se les llamo “magistrados dignos”, pero son los mismos que ahora aprobaron suspender el salario mínimo (contra los trabajadores), dejar abiertos los intereses de las tarjetas de crédito (contra las capas medias), suspender el impuesto IEMA (a favor de los ricos).

El otro elemento que podría generar contradicciones en el seno del gobierno es la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos, en especial en lo referente al apartado Laboral, dado que precisamente el bloque dominante guatemalteco es el que ha impedido la aplicación estricta de la legislación laboral vigente, mientras que dicho acuerdo impone multas a las que no están acostumbrados, dada la capacidad de corrupción de la justicia que tiene la empresa privada guatemalteca.

EL MOVIMIENTO SOCIAL ANTE EL RETO

Sobre aviso no hay engaño. El bloque dominante no hará concesiones a los intereses de los trabajadores ni del pueblo en general, porque no corresponde a sus intereses. Sin embargo lanzará una ofensiva de cooptación de dirigentes del movimiento social (con el señuelo de cargos) y muchos caerán en juego, como ya vimos en el movimiento de derechos humanos.

La primera gran reivindicación de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, tendría que ser la defensa del salario y del empleo, dada la situación económica y los primeros pasos y avisos gubernamentales.

Se pone como gran reto elevar la capacidad de negociación con el gobierno y la parte patronal, sin caer en el juego de la cooptación (no olvidar la diferencia de intereses de las partes). Durante los dos gobiernos anteriores la jugada estaba clara: en el PAN el presidente Arzú decidía, aunque casi nunca para los trabajadores. En el FRG por su lado Portillo tomaba decisiones y por el otro lo hacía Ríos Montt. En la actualidad en realidad no se sabe. Puede tomarlas el presidente Berger, algunos de sus comisionados, pero principalmente los jefes de los bloques dominantes: Julio Herrera por la OAF y Dionisio Gutiérrez por la GBIF.

Además, en el Congreso existen por lo menos cuatro bancadas cuyos votos son decisivos en cualquier negociación, lo que implica mantener ventanas abiertas en todos lados, sin que ello signifique caer en el juego de la politiquería partidaria.

Este mismo reto se abre en las negociaciones con la parte patronal. Ambos tipos de negociación necesitan del fortalecimiento de la organización social (del tipo que sea: asociaciones, sindicatos, cooperativa, pueblos indígenas, grupos de mujeres, etc.)

Tanto los trabajadores como los campesinos y las capas medias tendrán que revalorar sus intereses, mantenerse alertas a todos los movimientos del gobierno y sus verdaderos jefes y ha no olvidar que una cosa son unos y otra cosa son los otros.

Walter Valencia

Guatemala, 29 de enero de 2004